

UNIVERSIDAD DE HUANUCO



FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

TRABAJO DE SUFICIENCIA

“PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL”

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE ABOGADO

PRESENTADO POR EL BACHILLER:

CATALINA TANIA, ESTRADA SALVADOR RAMIREZ

ASESOR:

Mg. FELIX PONCE E INGUNZA



RESOLUCIÓN N° 104-2018-D-TSP-UDH
Huánuco, 20 de julio de 2018

Visto, la solicitud con Registro N° 234-18-FD formulado por **Catalina Tania ESTRADA SALVADOR RAMIREZ** solicita la Resolución de Sustentación de Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el Título Profesional de ABOGADA por dicha modalidad.

CONSIDERANDO:

Que, respecto a las modalidades que ofrece para optar el Título Profesional en la Universidad de Huánuco y estando a lo dispuesto en el Art. 14° del Reglamento General de Grados y Títulos de la UDH (Resolución N° 466-2016-R-CU-UDH del 23 MAY 2016); y habiendo concluido en Plan de Estudios, la petición es atendible favorablemente; en vías de regularización reconociendo la designación a los tres (03) miembros del jurado examinador.

Que, como es de verse en autos, el recurrente cumple con todos los requisitos preestablecidos;

Que, en consecuencia fíjase fecha, hora y lugar del desarrollo de la sustentación de Trabajo de Suficiencia Profesional solicitado por la Bachiller **Catalina Tania ESTRADA SALVADOR RAMIREZ**;

Estando a las atribuciones conferidas al Decano en el Art. 68° de la Ley Universitaria N° 30220, Art. 47°c) del Estatuto Universitario y Resolución N° 571-2013-R-UDH del 25 JUL 2013.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- **DESIGNAR** como integrantes del jurado examinador de la Bachiller **Catalina Tania ESTRADA SALVADOR RAMIREZ** a los docentes siguientes:

Dr. Fernando Corcino Barrueta	: Presidente
Abg. Hugo Peralta Baca	: Secretario
Mg. Pedro Martínez Franco	: Vocal

Artículo Segundo.- Señálese fecha de sustentación del día 25 de julio de 2018 a horas 10.30 am en el Auditorio de la UDH.

Regístrese, comuníquese y archívese



DISTRIBUCION: Vicerrector, Fac. Derecho, Programa de Derecho, Consejo de Facultad, Archivo



UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO

ACTA DEL TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL

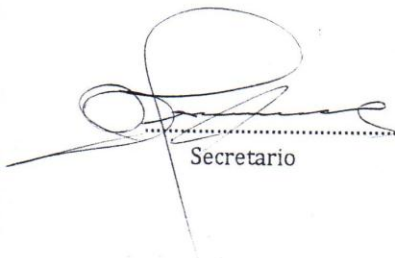
En la ciudad de Huánuco, siendo las 10:30 am horas del día Veintinueve del mes de Julio, en cumplimiento de lo señalado en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad de Huánuco, se reunieron: El Secretario Académico de la Facultad: Derecho y Ciencias Políticas y el Jurado Calificador nombrados mediante Resolución N° 104-2018-D-TSP-CPH integrado por los docentes:


<u>Dr. Fernando Cornejo Boruato</u>	presidente
<u>Abg. Hugo Recalta Bora</u>	Secretario
<u>Mg. Pedro Martínez Franco</u>	Vocal, para
calificar el Trabajo de Suficiencia Profesional solicitado por la Bachiller	
<u>Catalino Tena Estrada Salvador Remírez</u>	para optar el Título Profesional de
<u>Abogado</u>	


Dicho acto de sustentación se desarrolló en dos etapas: exposición y absolución de preguntas, procediéndose luego a la evaluación por parte de los miembros del Jurado.

Habiendo absuelto las objeciones que le fueron formuladas por los miembros del Jurado y de conformidad con las respectivas disposiciones reglamentarias, procedieron a deliberar y calificar, declarándolo (a) aprobado por unanimidad con el calificativo cuantitativo de regular y cualitativo de Trece (13).

Siendo las 11:30 am horas del día Veintinueve del mes Julio del año 2018, los miembros del Jurado Calificador firman la presente Acta en señal de conformidad.


Secretario


Presidente


Vocal

DEDICATORIA

*A mi guerrera y mi gigante, por ser
ellos, mi inspiración para lograr
mis más grandes sueños...*

INDICE

Dedicatoria.....	1
Indice.....	2
Introducción.....	3
Resumen.....	5

CAPITULO I

ASPECTOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA.....	6
---------------------------------------	---

CAPITULO II

ASPECTOS DEL AREA O SECCION.....	7
----------------------------------	---

CAPITULO III

IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA.....	7
--	---

Prescripción de la Acción Penal

1. Concepto.....	7
2. La Acción Penal.....	9
3. Causales de Extinción de la Acción Penal.....	10
4. Análisis de los artículo 80, 81, 82, 83 y 84 del Código Penal.....	11
4.1. Plazos Prescriptorios.....	11
4.2. La Reducción de los Plazos Prescriptorios.....	14
4.3. Inicio del Cómputo de los Plazos Prescriptorios.....	15
4.4. Interrupción de la Prescripción de la Acción Penal.....	18
4.5. Suspensión de la Prescripción de la Acción Penal.....	21
5. Análisis de Expediente Judicial.....	24

CAPITULO IV

APORTES PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA.....	40
--	----

Conclusiones.....	45
Recomendaciones.....	47
Referencias Bibliográficas.....	48

INTRODUCCION

El presente trabajo, se centra en una de las instituciones jurídicas con más relevancia para los operadores de justicia, pues en nuestro ordenamiento jurídico, se ha establecido la necesidad de limitar el ejercicio del ius puniendi del Estado, a través de la institución jurídica de la *“prescripción de la acción penal”*, institución de suma importancia, ya que su declaración implica no entrar a tallar si la conducta constituye o no delito sino el hecho de si se ha superado el plazo establecido por ley para determinar la prescripción de la acción penal. En ese sentido, el legislador creo conveniente regular dicha institución en la Parte General del Código Penal, donde encontramos, entre otros, a los plazos prescriptorios, el inicio de dichos plazos, la suspensión e interrupción de la prescripción de la acción penal, donde justamente en este último radica los cuestionamientos, debido a la interpretación errónea que se viene dando al momento de su aplicación.

Ahora bien, conforme al artículo 83º del Código Penal, cuando hubiere operado una de las causales de interrupción de la prescripción, a saber: las actuaciones del Ministerio Público o de las autoridades judiciales o la comisión de un nuevo delito doloso, será de aplicación el plazo extraordinario de prescripción, el cual equivale al plazo ordinario de prescripción más la mitad. Al parecer, la confusión radicaría en la norma establecida en el último párrafo de dicho artículo que señala: *“Sin embargo, la acción penal prescribe, en todo caso, cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción”*. Lo que sucede es que no vienen entendiendo la naturaleza jurídica de la interrupción de la prescripción, que no es la de sumar la mitad del plazo máximo, sino la de dejar sin efecto el tiempo transcurrido cuando ha habido intervención con las actuaciones del Ministerio Público y/o el Poder Judicial.

Gracias a las prácticas desarrolladas en el Estudio Jurídico “Estrada”, pude percatarme de las contradicciones que presenta el artículo 83º del Código Penal con respecto al cálculo del inicio del nuevo plazo de prescripción, es por eso que le di vital importancia a un proceso penal –sobre los delitos de

usurpación y daño agravado— que justamente era llevado por dicho estudio, a través del cual pude disipar mis dudas y poder a través de este trabajo explicar de manera clara y detallada todo lo relacionado en cuanto a este tema tan controversial, para finalmente presentar mi posición al respecto, esperando que sea de un gran aporte a la colectividad jurídica en general.

RESUMEN

El presente trabajo surge a raíz de las diversas contradicciones efectuadas por el órgano jurisdiccional como por el Ministerio Público, con respecto a la aplicación del artículo 83 del Código Penal, cuando se debe determinar el inicio y término del plazo de la prescripción de la acción penal. Es por eso, que este estudio lleva como título “Prescripción de la Acción Penal”, desarrollando en principio que es la prescripción, así como los conceptos que se debe tener en cuenta para un mejor entender del tema a tratar, esto es la “acción penal” y cuáles son las causales que extinguen dicha acción, por otro lado hemos analizado cuales son los plazos prescriptorios según la norma penal –*artículo 80°*–, así como también desde cuando se empieza a computar los plazos prescriptorios en los delitos en grado de tentativa, delitos instantáneos, delitos continuados y/o delitos permanentes –*bajo el contexto del artículo 82 del Código Penal*–, para centrarnos en analizar el artículo 83 de la norma penal que justamente habla sobre la interrupción de la prescripción –*norma que hasta la fecha viene aplicándose en forma incorrecta*–; culminamos nuestro análisis con un ejemplo, para lo cual se estudia un proceso penal sobre los delitos de usurpación y daño agravado, con la finalidad de determinar cuándo debe comenzarse a contabilizar el plazo de la prescripción extraordinaria y cuando debe terminar, cuestionando los argumentos emitidos por el Juez Penal de primera instancia y la Sala Penal Liquidadora de Huánuco, para declarar de oficio extinguida la acción penal por prescripción.

Finalmente, se concluye que hasta el día de hoy se viene interpretando de forma tradicional los artículos 82 y 83 del Código Penal, lo que ha conllevado a prescribir las acciones penales, confundiendo los plazos, sus contenidos y la iniciación para la cuantificación ordinaria y extraordinaria de la acción penal, situación que debe superarse para la seguridad jurídica del ciudadano y la defensa de su derecho constitucional de tutela procesal efectiva.

CAPITULO I

ASPECTOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA

1.1 Nombre o Razón Social

Estudio Jurídico “Estrada Abogados”

1.2 Rubro

Asesoramiento legal exclusivamente en procesos civiles, penales, constitucionales y contenciosos administrativos.

1.3 Ubicación

Jr. General Prado N° 815 2do Piso Of. 03

1.4 Reseña

El estudio jurídico “Estrada Abogados” nace en la ciudad de Lima en el año 1973, funcionando en dicha ciudad por un periodo de 11 años, posteriormente se trasladó a la ciudad de Huánuco donde inicialmente se instaló en una oficina ubicada en la sexta cuadra del Jr. Leoncio Prado, después de tres años se trasladó al Jr. Huánuco, para luego desde el año 1987 trasladarse a uno de los ambientes de la Cooperativa “San Francisco” ubicado en la tercera cuadra del Jr. Dámaso Beraun hasta el año 1999, y finalmente desde el año 2000 a la fecha viene funcionando en el Jr. General Prado N° 815 segundo piso Of. 03. Este estudio está representado por el Abog. Prudenciano Estrada Salvador con Registro en el Colegio de Abogados de Lima N° 5533 y en el Colegio de Abogados de Huánuco N° 88. El abogado principal tiene la defensa libre en forma exclusiva, siendo cuatro áreas su especialidad, asuntos civiles, penales, constitucionales y contenciosos administrativos. Durante el ejercicio de su profesión ha obtenido una sentencia vinculante recaída en el Expediente N° 3362-2004-AA sobre materia de amparo, donde se ha establecido como precedente vinculante sobre los tipos de medios de comunicación en los que se puede solicitar una rectificación.

CAPITULO II

ASPECTOS DEL AREA O SECCION

El estudio jurídico “Estrada” a cargo del Abog. Prudenciano Estrada Salvador, brinda asesoramiento en distintas áreas del derecho a la ciudadanía de Huánuco desde el año 1985. Este estudio jurídico siempre ha transmitido un espíritu innovador y su capacidad de buscar soluciones a medida, para problemas que presenten características especialmente complejas o fuera de lo común; brinda una firme y dinámica defensa de derechos e intereses de sus clientes, iniciando acciones legales a través de demandas, interponiendo todas las defensas o excepciones que el derecho y la ley han establecido, así como el acompañamiento a sus clientes en todas las etapas del proceso.

Este estudio tiene a cargo expedientes en distintas materias como son civil, penal, laboral, familia, etc. enfocándose solo en los procesos penales, con la finalidad de llevar a cabo un estudio de la problemática tratada en el presente trabajo.

Finalmente, en dicho estudio jurídico con respecto a la práctica de la abogacía, buscan transmitir que es mucho más que un negocio, es un servicio que el profesional del derecho presta a su cliente, estableciéndose una compleja relación de confianza, asesoramiento, lealtad y confidencialidad; siendo su lema principal *“el triunfo y el éxito en un caso es la consecuencia del trabajo, la experiencia, la reflexión y el estudio”*.

CAPITULO III

IDENTIFICACION DE LA SITUACION PROBLEMÁTICA

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCION PENAL

1. Concepto: La Prescripción

Que para ubicar el contenido jurídico de la prescripción, es necesario tener el concepto claro de lo que esta institución jurídica significa.

Son diversos los autores y numerosos los estudios que han hecho referencia al término “prescripción”, tanto en materia de *derecho civil, derecho tributario y derecho penal*. El Tribunal Constitucional ha establecido que la prescripción, desde un punto de vista general, “*es la institución jurídica mediante la cual, por el transcurso del tiempo, la persona adquiere derechos o se libera de obligaciones*”.¹

Y, desde el punto de vista penal -*que es el tema a tratar en el presente trabajo*-, es una causa de extinción de la responsabilidad criminal fundada en la acción del tiempo sobre los acontecimientos humanos o en la renuncia del Estado al *ius punendi*, en razón de que el tiempo transcurrido borra los efectos de la infracción, existiendo apenas memoria social de la misma. Es decir, que mediante la prescripción se limita la potestad punitiva del Estado, dado que “se extingue la posibilidad de investigar un hecho criminal y, con él, la responsabilidad del supuesto autor o autores del mismo.”²

En ese sentido, la ley establece situaciones que extinguen la acción penal, en virtud de las cuales el Estado autolimita su potestad punitiva, como son: causas naturales (muerte del imputado), criterios de pacificación que tienen como base la seguridad jurídica (cosa juzgada o prescripción) o razones sociopolíticas o de Estado (amnistía).

¹ Exp. N° 1805-2005-HC/TC. Caso Máximo Humberto Cáceda Pedemonte del 29-04-2005

² Idem

El Código Penal Peruano prescribe la prescripción como uno de los supuestos de extinción de la acción penal. La institución de la Prescripción se encuentra regulada en el Libro I (Parte General), Título V (Extinción de la Acción Penal y de la Pena), desde el artículo 78° hasta el artículo 91° del Código Penal vigente.

2. La Acción Penal

Es de importancia tener presente la idea de la “*acción penal*”, ya que juega un rol importante en la comprensión del tema de la prescripción. La acción penal es la que evoca la jurisdicción, poniendo en funcionamiento los organismos del poder del estado destinados a juzgar los casos concretos en virtud de la aplicación de las normas (jueces penales) ejercida contra el presunto autor de un delito, con pretensión punitiva.

Es el Ministerio Público a través del Fiscal, órgano público, el encargado de ejercer la acción penal en los delitos de acción pública, que son la mayoría.

Los delitos de acción pública son entre otros, el homicidio, las lesiones múltiples, graves o reiteradas y el robo, que se deducen aún sin acusación privada. Los de instancia privada son los referidos a delitos como violación o abusos deshonestos, donde, si bien se necesita que la acción la promueva el agraviado o su representante legal, luego la investigación continúa de oficio.

El proceso penal en los delitos de acción pública, posee dos etapas: la sumarial que prepara la acción penal averiguando si existe mérito para que una persona sea acusada por un delito y el plenario, que comienza con la acusación fiscal (la acción) que limita al Juez en su decisión ya que no puede en su sentencia resolver más allá de lo peticionado.

La acción penal tiene como principal característica la de ser una acción pública, aún cuando se ejerza a instancia de parte, pues satisface intereses de la colectividad en general. La responsabilidad por delitos es solidaria, y la acción penal se dirige a todos los autores, por lo cual se dice que es indivisible. Es además irrevocable, en los delitos de acción pública, iniciada la acción es imposible la retractación, e indefectiblemente se dictará sentencia.

3. **Causales de Extinción de la Acción Penal**

La extinción de la acción penal es la pérdida del derecho del Estado para ejercer su poder punitivo contra quien ha cometido un delito en agravio de la sociedad. En estos casos cesa el derecho de imponer la pena, hacerla efectiva o continuar exigiendo su cumplimiento; para el sujeto desaparece la obligación de sufrir la pena. Las causales de extinción de la acción penal se recogen en el artículo 78° del Código Penal Peruano, siendo las siguientes:

- ✓ *Por muerte del imputado:* Se acredita el fallecimiento de los encausados con las partidas de defunción, y de acuerdo a la normatividad vigente, corresponde declarar la extinción de la acción.
- ✓ *Prescripción:* Es el instituto de naturaleza procesal por el cual el transcurso del tiempo, computado desde la comisión del delito, convierte la persecución penal en innecesaria por extemporánea. Se trata de la “*pérdida de la pretensión punitiva del estado por haber dejado pasar el tiempo sin ejercer la acción penal*”.
- ✓ *Amnistía:* Supone un total olvido del delito. Su concesión mediante ley borra todo recuerdo del delito cometido o de la pena pronunciada; es decir, extingue por completo la pena y todos sus efectos.

- ✓ *El derecho de gracia (indulto):* Reconocido por el artículo 89 del Código Penal, consiste en la gracia otorgada por el Jefe de Estado a los condenados por sentencia firme remitiéndoles toda la pena impuesta o parte de ella, o conmutándola por otra de menor gravedad. Sus efectos son más limitados que los de la amnistía. Aun siendo total el indulto, se mantiene la inscripción de la condena en el oportuno Registro; el indultado dejará de cumplir la pena impuesta, o parte de ella, pero técnicamente es un penado y si vuelve a delinquir podrá ser apreciada la circunstancia modificativa de reincidencia.
- ✓ *Por autoridad de cosa juzgada:* Es decir, ante la existencia de una resolución judicial firme que puso fin al proceso. Así tenemos, el principio del *non bis ídem*, que evita la doble sanción o juzgamiento sobre el mismo sujeto, hecho y fundamento.
- ✓ *En los casos que solo proceda la acción privada, esta se extingue, además de las establecidas en el numeral 1, por desistimiento y transacción:* Ambos casos implican un perdón del ofendido al infractor penal, el primero mediante una manifestación unilateral, y el segundo mediante el acuerdo de las partes.

4. Análisis de los artículos 80, 81, 82, 83 y 84 del Código Penal

4.1. Plazos Prescriptorios (Artículo 80 del CP):

Prescripción Ordinaria

Hablamos de prescripción ordinaria cuando transcurre un periodo de tiempo igual al máximo señalado por ley para la conducta ilícita, sin que este hubiese sido interrumpido. Es decir, en caso de que el plazo de tiempo fijado como máximo para sancionar el delito transcurriese sin que se hubiese visto afectado en su recorrido, se entenderá prescrita la acción penal.

Este artículo trata sobre los plazos de la prescripción de la acción penal, fijados normativamente conforme a la naturaleza de la pena incriminada, según las figuras concursales delictivas, dependiendo de la gravedad de la pena así como en función de la cualidad funcional del autor, habiéndose establecido topes legales a los plazos prescriptorios.

Según este dispositivo legal, en el caso de los delitos sancionados con **pena privativa de libertad**, habrá que tenerse en cuenta la pena conminada para el delito en específico, es decir, el máximo de la pena fijada por la ley para el delito. Por ejemplo: Carmen Rojas es denunciada el 02 de mayo de 2007 por su vecino Juan por presunto delito de usurpación, que habría cometido el 05 de febrero de 2003, como el delito citado en nuestro Código Penal tiene una pena máxima de tres años, teniendo en cuenta que tal ilícito penal es un delito de comisión instantánea aunque tenga efectos permanentes, pues será de aplicación el artículo 82 del Código Penal. Es decir que se empieza a computar el plazo de prescripción desde el 05 de febrero de 2003 ya que a la fecha de la interposición de la denuncia habían transcurrido más de cuatro años, por lo que había operado la prescripción de la acción penal a favor de Carmen Rojas; por lo tanto si el Fiscal dispuso la formalización y continuación de la investigación preparatoria por tal hecho, Carmen Rojas puede interponer una excepción de prescripción, la cual debe ser declarada fundada y ordenarse el archivo definitivo de todo lo actuado.

No obstante ello, la ley ha impuesto un límite de 20 años a este plazo máximo y lo ha duplicado en el caso de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado.

Otro supuesto, es el **concurso real de delitos**, las acciones prescriben separadamente en el plazo señalado para cada uno. Ejemplo: Juan Pérez el día 22 de octubre del 2011 mata a María Quispe, y luego el 29 del mismo mes realiza un hurto agravado en

agravio de su vecina. En el primer delito por homicidio simple, según el artículo 106° del Código Penal prevé una pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años, en consecuencia la acción penal prescribe a los veinte años. En el segundo delito, tipificado en el artículo 188° del mismo cuerpo de ley, establece una pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años, en este caso la prescripción se cumple a los 6 años. Por tanto, pasado los 6 años no se puede perseguir el delito por hurto agravado, siendo posible la persecución del delito solo por homicidio hasta los veinte años.

En el caso del **concurso ideal de delitos**; esta figura concursal, toma lugar cuando un autor comete mediante acción u omisión varias infracciones penales, infracciones que se encuentran separadas en el tiempo y en el espacio, pero que a efectos de punición son integradas en base a una unidad subjetiva, al estar conectados por un mismo sujeto infractor. En esta hipótesis, las acciones penales prescriben cuando haya transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente al delito más grave, en esos casos, la prescripción no será mayor de 20 años. Por ejemplo un sujeto conduciendo en estado de ebriedad causa lesiones graves a una persona y causa daños materiales en una vivienda. Las lesiones graves recogidas en el artículo 121° del Código Penal sanciona el delito con una pena de 4 a 8 años, los daños materiales tipificados en el artículo 205° prevé una pena privativa de libertad no mayor de 2 años. En tal caso la prescripción se cumple a los 8 años, por ser el más grave.

Tratándose de **delitos sancionados con pena de cadena perpetua** se extingue la acción penal a los 30 años.

Mientras que en el caso que el delito incriminado esté sancionado con una **pena distinta** a la de privación de libertad (pena de limitación de días libres, prestación de servicios a la comunidad, inhabilitación, multa, expatriación y expulsión del país), la acción penal prescribirá a

los 2 años, según la modificación efectuada por la Ley N° 28117³, por cuanto se buscaba una mayor celeridad y eficacia procesal, que en términos de descarga procesal y en razón de un proceso sin dilaciones indebidas, considero positivo, en tanto la pena probable a imponer se encuentre en relación a un delito de mínima gravedad.

En caso de **delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos** contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por este, o cometidos con integrantes de organizaciones criminales, el plazo de prescripción se duplica. Un ejemplo, el delito de abuso de autoridad previsto en el artículo 376° del Código Penal establece una pena no mayor de 3 años, en tal sentido la pena prescribe a los 6 años.

Es decir, el Código Penal distingue de manera sistemática y funcional dos plazos para la prescripción de la acción penal; es así que en el artículo 80° regula lo concerniente al **plazo ordinario** *–como ya lo hemos explicado en líneas arriba, teniendo en cuenta la naturaleza, las figuras concursales, entre otros–* y en el artículo 83° al final se hace referencia al **plazo extraordinario**.

Cabe señalar que para ambos tipos de plazos de prescripción el cómputo se inicia observando las reglas que se establecen en el artículo 82° del Código Penal.

4.2. La reducción de los plazos prescriptorios (Artículo 81 del CP):

El legislador consideró que aquellas personas que tuviesen más de 18 y menos de 21 años, o más de 65 años al momento de la comisión del hecho punible gozarían de la llamada responsabilidad restringida, pudiendo, inclusive, reducirsele prudencialmente la pena señalada por ley para el ilícito. Dicho pensamiento ha sido trasladado hacia el enfoque que se da a la prescripción, en el sentido de que los plazos

³ Ley de Celeridad y Eficacia Procesal Penal del 10 de diciembre del 2003.

fijados para la prescripción de la acción penal se verán reducidos en la mitad si cuando al momento de la comisión del hecho investigado, el agente tenía más de 18 y menos de 21 años, o más de 65 años.

Esta reducción de plazos a la mitad del máximo de la pena, tiene consecuencias distintas, según el grupo de casos al que se aplique, así por ejemplo:

- a) Cuando quien, con fecha 09 de febrero de 2017, poseyendo menos de 21 o más de 65 años cometa el ilícito de hurto agravado (artículo 186° del CP) cuya pena máxima es 6 años, el plazo ordinario de prescripción se reduce a la mitad, quedando en 3 años; con lo cual prescribiría la acción el 09 de febrero de 2020, pero ello solo si antes de los 3 años de plazo, no se hubiera abierto proceso penal en su contra.
- b) En cambio, si en el mismo supuesto, por el mismo ilícito de fecha 09 de febrero de 2017, se abriera proceso penal el 04 de abril de 2018 (suponiendo una fecha cualquiera), este acto jurisdiccional interrumpiría la prescripción y dejaría sin efecto el tiempo transcurrido, con lo cual empezaría un nuevo cómputo del plazo de prescripción. Y como en todo caso, para los supuestos en los cuales haya interrupción de la prescripción, se tiene en consideración el plazo ordinario "reducido a mitad" -de 6 años queda en 3 años- (artículo 81° del CP), a la misma que se le suma el plazo extraordinario -1 año y medio- (artículo 83° del CP). Aquí en este supuesto, el plazo (ordinario y extraordinario) "reducido a la mitad" de prescripción quedaría en 4 años y 6 meses, el cual es computado como un nuevo plazo de prescripción a partir del momento (día siguiente) de la interrupción. Entonces, si se "interrumpió" la prescripción el 04 de abril de 2018, se inicia el nuevo computo del plazo, el 05 de abril de 2018, prescribiendo la acción penal, en todo caso, el 06 de octubre de 2022, para los imputados restringidos que tienen menos de 21 o más de 65 años

(en este sentido, la regulación de la interrupción de la prescripción: primer, segundo y cuarto párrafo del artículo 83º del Código Penal).

4.3. Inicio del cómputo de los plazos de prescripción (Artículo 82 del CP):

Hasta ahora hemos visto en qué momento prescribe la acción penal; es decir, en qué momento caduca la oportunidad del Estado de emitir una sentencia de carácter penal. A continuación analizaremos en qué momento se inicia el conteo del plazo de prescripción, esto es, cuál es ese primer día que nos servirá de base para empezar a contar el plazo, por lo que debemos remitirnos al artículo 82º del Código Penal, el cual establece que *los plazos de prescripción penal comienzan*:

- ✓ En la tentativa, desde el día en que cesó la actividad delictuosa;
- ✓ En el delito instantáneo, a partir del día en que se consumó;
- ✓ En el delito continuado, desde el día que terminó la actividad delictuosa; y,
- ✓ En el delito permanente, a partir del día en que cesó la permanencia.

En la **tentativa**; según el desarrollo del *iter criminis*, el plan criminal de un autor se valora según diversas etapas que comprende una fase interna y otra externa, es decir, el plan criminal, resultado ideado, primero en la mente criminal de su autor, que para efectos de relevancia jurídico-penal, son punibles únicamente cuando estas ideas son manifestadas en el mundo exterior a través, de actos encaminados a la lesión de un bien jurídico. El artículo 16º del Código Penal establece: *“Con la tentativa el agente da inicio a la ejecución del delito que decidió cometer, sin consumarlo”*. Por ejemplo, el autor que planea matar a su víctima a golpes certeros, éste sabe que necesita un cúmulo de ellos y en determinadas zonas estructurales, a fin de lograr el resultado muerte; pero, si por circunstancias ajenas a

su voluntad, cesa dichos golpes y se aparta del lugar, no se habrá producido el resultado muerte, sin embargo, esos golpes ya constituyen un evento perjudicial para la víctima, que serán penalizados como una tentativa de homicidio. La tentativa no se admite en los delitos de peligro o de mera actividad, tampoco en los delitos culposos, en los preterintencionales y los delitos de omisión propia; por consiguiente, los plazos comienzan a contarse desde el día en que cesó la actividad delictuosa.

En los **delitos instantáneos**; es aquel cuando el estadio consumativo se alcanza cuando se realizan materialmente todos los elementos constitutivos descritos en el tipo penal, es decir se consuma inmediatamente, sin necesidad de que medie una separación espacio-temporal entre la acción y el resultado; en consecuencia, en los delitos instantáneos, el plazo prescriptivo comienza a partir del día en que se consumó el hecho delictivo. Por ejemplo, en el delito de usurpación, según el artículo 202° numeral 2 del Código Penal, en concordancia con el artículo 204° numeral 2 del mismo cuerpo normativo, la usurpación agravada es condenada con una pena privativa de libertad no menor de 2 años y máximo de 6 años, en efecto en este delito si no hubiese habido ninguna interrupción, el plazo ordinario de prescripción, contados desde el día que se materializó el delito, es hasta 6 años sin ninguna interrupción.

En el **delito continuado**; constituye en realidad una verdadera ficción legal que encubre un concurso real de delitos; puede ser definido como la multiplicidad de acciones u omisiones que un único autor comete en un determinado tiempo, pero que se encuentran separados en el tiempo y en el espacio. Ejemplo, el agente que se encuentra incurso en el delito de falsedad material (artículo 427 del CP) que habiendo o no participado en la elaboración falsaria de un documento, ingresa este documento (público o privado) al tráfico jurídico, mediante su uso en varias oportunidades, a fin de hacerse ilícitamente de un derecho que corresponde legalmente a un tercero;

en este caso, cada ingreso al tráfico jurídico constituye una específica realización típica, sin embargo, el uso impropio del documento falsario proviene de una misma resolución criminal; por consiguiente el inicio de los plazos prescriptorios se iniciara a partir del momento en que termina la actividad delictuosa, es decir, con el último ingreso al tráfico jurídico, siempre y cuando se cumpla con la condición objetiva de punibilidad exigida por el tipo penal, esto es que de su uso se pueda causar un perjuicio a un tercero.

En el **delito permanente**, un aspecto principal que caracteriza a esta figura delictiva, es la prolongación del estado antijurídico que propicia la acción típica perpetrada por el autor, es decir, la lesión al bien jurídico no cesa en el tiempo, incidiendo en la posibilidad de admitir formas de participación; por ejemplo, en el caso del secuestro o usurpación, mientras no cese la actividad antijurídica, la privación de la libertad del rehén o el despojo de la posesión del inmueble a su legítimo ocupante, la consumación se verá prolongada en el tiempo. La finalización de este dinamismo prorrogado puede producirse ya sea por la decisión del agente o por causas extrañas a su voluntad como sería, por ejemplo, la intervención de la autoridad policial.

4.4. Interrupción de la prescripción de la acción penal (Artículo 83 del CP):

El artículo 83° del Código Penal prescribe lo siguiente:

“La prescripción de la acción se interrumpe por las actuaciones del Ministerio Público o de las autoridades judiciales, quedando sin efecto el tiempo transcurrido.

Después de la interrupción comienza a correr un nuevo plazo de prescripción, a partir del día siguiente de la última diligencia.

Se interrumpe igualmente la prescripción de la acción por la comisión de un nuevo delito doloso.

Sin embargo, la acción penal prescribe, en todo caso, cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción.”

“Interrupción”, en términos muy cotidianos sería lo que comúnmente decimos: “borrón y cuenta nueva”. La contabilización del tiempo ya transcurrido, por alguna condición que prevé el Código Penal y que más adelante profundizaremos, queda sin efecto. No es que se paralice o congele el tiempo ya transcurrido sino que simplemente hay un reinicio de ese tiempo. Desaparece todo lo ya transcurrido y comienza a correr una nueva contabilización.

Para el autor Peña Cabrera a consecuencia de la “interrupción de la prescripción”, el tiempo que transcurre durante el tiempo de realización de determinadas actuaciones oficiales por parte de las agencias estatales competentes, éste queda sin efecto, determinándose al término de la última diligencia, el inicio de un nuevo plazo prescriptorio.

Este artículo señala en qué condiciones se interrumpe el plazo de prescripción y comienza a contabilizarse uno nuevo, operando en todo caso el plazo de prescripción extraordinaria.

En su primer párrafo señala que la prescripción de la acción penal se interrumpe por:

- a) *Las actuaciones del Ministerio Público:* No cualquier tipo de actuación fiscal supondrá la interrupción de la prescripción, sino únicamente aquellas actuaciones que se someten a las funciones de promoción, persecución y acusación, como atribuciones funcionales del Fiscal. Por ejemplo tenemos, la formulación de la denuncia penal respectiva ante el órgano jurisdiccional competente o la formalización de la investigación preparatoria conforme al Código Procesal Penal, el dictamen acusatorio, etc.

- b) *Las actuaciones de las Autoridades Judiciales:* Sobre dichas actuaciones, se debe precisar que no serían causales de interrupción de la acción penal los decretos de mero trámite, las comunicaciones dirigidas a organismos públicos o privados, las peticiones relacionadas con la reparación civil; por el contrario deben significar actuaciones judiciales que tengan que ver con la punibilidad, con la existencia del delito y con la acreditación de la responsabilidad penal del imputado; por ejemplo, según el Código de Procedimientos Penales, las actuaciones judiciales comenzaban con el autoapertorio de instrucción, y terminaban, si se trataba de procesos sumarios, con la resolución que ordenaba autos de citación para dictar sentencia y, si se trataba de procesos ordinarios iniciaba con las actuaciones judiciales –*estas, auto apertorio de instrucción y otros*–, y terminaba con el Informe Final emitido por el Juez Instructor, a fin de que el expediente sea elevado al Superior para que previo a que el Fiscal haya formulado acusación, declarar mérito para pasar a juicio oral y señalar fecha para la audiencia del inicio de juicio oral.
- c) *La comisión de un nuevo delito doloso:* En el tercer párrafo del artículo 83 del Código Penal, se encuentra normado que “*se interrumpe igualmente la prescripción de la acción penal por la comisión de un nuevo delito doloso por el imputado*”. Es decir, nos encontramos ante un hecho delictivo que ya es de conocimiento por parte de los órganos de persecución penal, y muy a pesar de ello, sobreviene una situación posterior, el agente comete un nuevo delito doloso. Sobre esta causa de interrupción, resulta necesario, establecer las siguientes precisiones: primero, el delito que se encuentra siendo investigado antes las instancias competentes, puede ser un hecho delictivo doloso, imprudente o preterintencional, en cambio, el nuevo delito, cuya comisión se la atribuye al mismo imputado, debe ser necesariamente doloso. El fundamento de esta circunstancia de interrupción supone en

impedir que el procesado sea beneficiado prontamente con la prescripción, cuando con su conducta ha manifestado una nueva desobediencia normativa.

Asimismo se encuentra establecido que: *“Después de la interrupción, comienza a correr un nuevo plazo de prescripción a partir del día siguiente de la última diligencia”*. En este párrafo ya se encuentra precisado cuando termina la interrupción de la prescripción – *anteriormente se precisó, cuándo comenzó la prescripción*–, por lo tanto encontrándose determinado en la norma, sobre la terminación del plazo de la interrupción efectuados por el Ministerio Público o el Poder Judicial, está determinado que termina el plazo de la interrupción *“a partir del día siguiente de la última diligencia”*.

Prescripción Extraordinaria

El último párrafo del artículo 83 dispone a la letra lo siguiente: *“Sin embargo la acción penal prescribe, en todo caso, cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción”*; es decir, al plazo ordinario se le suma una mitad, por ejemplo si la conducta se refiere al delito de receptación (cuya pena es no mayor de tres años), habiéndose promovido ya la acción penal por este ilícito, la acción prescribiría a los cuatro años y medio. La prescripción extraordinaria ha sido calificada como una excepción, la cual en la práctica judicial se ha convertido en una fórmula general, puesto que la mayoría de las veces, las resoluciones judiciales que amparan o desestiman la excepción de prescripción, siempre la fundamentan con los plazos de prescripción extraordinaria, sin indicar el porqué de aplicar una u otra, sin mencionar las causales concretas de interrupción previstas en dicho artículo, como se va a poder apreciar en el proceso penal que ahondaremos más adelante.

Por todo lo expuesto, debemos precisar que para determinar el plazo de la prescripción extraordinaria, solo se tiene que tener en cuenta la

interrupción de las actuaciones del Ministerio Público, del Poder Judicial y que se haya cometido un solo acto doloso por el imputado.

4.5. Suspensión de la prescripción de la acción penal (Artículo 84 del CP):

El artículo 84 del Código Penal establece: *“Si el comienzo o la continuación del proceso penal depende de cualquier cuestión que debía resolverse en otro procedimiento, se considera en suspenso la prescripción hasta que aquel quede concluido”*.

De la lectura del artículo en mención surge, como una primera idea, la referencia a las cuestiones prejudiciales; es decir, cuándo debe establecerse el carácter delictuoso del hecho materia de investigación judicial en una vía extrapenal. A su vez, también incluimos las cuestiones previas dentro del marco de aquellas ocurrencias de carácter procesal que pudieran suspender el cómputo del plazo de prescripción. Las cuestiones previas nacen como resultado de la no concurrencia de un requisito de procedibilidad, el cual no fue advertido por el juez al momento de dictar el auto apertorio de instrucción.

Entonces *“suspensión”*, implica que, por alguna causal reconocida en la legislación penal, el cálculo de la acción liberadora en el tiempo para prescribir la acción penal se vea congelado o paralizado, es decir, quede intacta desde su suspensión. Se reanuda tal contabilización si existe alguna causal que lo autorice. Un ejemplo sencillo sería en caso que a un sujeto se le está procesando por el delito de Bigamia (artículo 139 del CP), para lo cual el tipo objetivo exige, entre otros elementos, que el sujeto activo deba contraer matrimonio cuando éste ya estaba casado; es decir, que se case nuevamente siendo su anterior matrimonio vigente aun, pero paralelamente, en un proceso civil, se esté discutiendo justamente sobre la validez del primer matrimonio (si es o no es nulo), por ello se

suspende (congela) el plazo de prescripción de la acción penal hasta que el otro proceso (ya que la imputación del delito de bigamia depende del resultado de este proceso civil) quede concluido y así continuar sumando la contabilización desde donde se suspendió.

A diferencia de lo que sucede, en las causas de interrupción de la prescripción, que obedecen estrictamente a actuaciones de las instituciones de persecución penal, en este caso, la suspensión obedece a impedimentos, a obstáculos que deben ser corregidos y subsanados, a fin de que válidamente se promueva la acción penal ante la judicatura.

La “suspensión de la prescripción” ha sido materia de controversia a raíz de que el inciso 1 del artículo 339 del Código Procesal Penal establece *“La formalización de la investigación suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal”*, lo cual generaría contradicción con el artículo 83 del Código Penal; sin embargo, nuestra Corte Suprema ha unificado criterios a través de la siguiente doctrina jurisprudencial:

- a. El Acuerdo Plenario N° 01-2010, donde precisa que: *“la literalidad del inciso 1 del artículo 339° del Código Procesal Penal regula expresamente una suspensión sui generis (...) la Formalización de la Investigación Preparatoria emitida por el Fiscal, como director y coordinador de esta etapa procesal (...) suspende el curso de la prescripción de la acción penal. (...) En consecuencia, queda sin efecto el tiempo que transcurre desde este acto fiscal hasta la culminación del proceso con una sentencia o resolución judicial que le ponga fin o en su caso hasta que sea aceptada la solicitud de sobreseimiento del Fiscal”*.⁴
- b. Por otro lado, el Acuerdo Plenario N° 3-2012/CJ-116 no solo consolida la doctrina que sustenta la “suspensión” fijada en el

⁴ Acuerdo Plenario N° 1-2010/CJ-116 del 16 de noviembre de 2010. Fundamento 26°

artículo 339, inciso 1 del Código Adjetivo con el Acuerdo Plenario N° 01-2010/CJ-166, sino que establece un límite temporal a la duración de dicha suspensión de la prescripción formada por la formalización de la investigación preparatoria, esto es “(...) *Frente a la ya demostrada autonomía de las reglas y efectos de la suspensión en relación a las que gobiernan la configuración y eficacia de la interrupción de la prescripción de la acción penal, cabe concluir señalando que el artículo 339, inciso 1 del Código Procesal Penal de 2004 no ha derogado ni modificado, directa o indirectamente, las reglas contenidas en el artículo 83° del Código Penal vigente. (...) en adelante debe entenderse que la suspensión de la prescripción en el caso del artículo 339 inciso 1, no podrá prolongarse más allá de un tiempo acumulado equivalente al plazo ordinario de prescripción más una mitad de dicho plazo*”.⁵

- c. A su vez, la Sentencia de Casación N° 383-2012, regula que “(...) *al haberse formalizado la investigación (...) se suspende el curso de la prescripción de la acción penal, el cual no puede prolongarse más allá de un tiempo acumulado equivalente al plazo ordinario más una mitad de dicho plazo (...)*”⁶, precisando que vencido el plazo de suspensión, continuará el curso de la prescripción que inicialmente se suspendió, conforme al artículo 339 inciso del Código Adjetivo.
- d. Y finalmente, la Sentencia de Casación N° 643-2015, también ha precisado que: “*aquí no hay discusión los Acuerdos Plenarios N° 01-2010 y N° 3-2012/CJ-116 son claros; la formalización de la investigación no es un acto de interrupción de la prescripción de la acción penal regulado en el artículo 83° del Código Penal, sino un acto de suspensión literalmente establecido en el inciso 1 del*

⁵ Acuerdo Plenario N° 3-2012/CJ-116 del 26 de marzo de 2012. Fundamento 10°

⁶ Sentencia de Casación N° 383-2012-La Libertad del 15 de octubre de 2013. Fundamento 4,10.

artículo 339° del Código Penal, y expresamente delimitado por acuerdos plenarios antes citados (...).”⁷

En ese orden de ideas, queda clara la postura de la Corte Suprema, señalando que la formalización de la Investigación Preparatoria suspende la prescripción de la acción penal, más no la interrumpe.

5. Análisis de Expediente Judicial

Expediente N° : 104-2007-PE

Juzgado : Juzgado Penal Liquidador de Huamalies

Delito : Usurpación agravada y Daño agravado

Imputados : Violeta Esmeralda Céspedes Valdivia, Zotico Callas Melgarejo, Cesar López Claudio, Manuel Gonzales Claudio, Efraín Salvador Claudio Garay, Rubén Gonzales Claudio y Esteban Gonzales Claudio

Habiendo hecho un análisis sobre los temas más trascendentales de la prescripción de la acción penal, a continuación para un mejor entender, considerando lo determinado en el primer y segundo párrafo del artículo 83° del Código Penal, mediante el expediente judicial antes citado – *tramitado con el Código de Procedimientos Penales*– se explicará cuándo debe comenzar a contabilizarse el plazo de prescripción extraordinaria.

El delito de usurpación es un delito instantáneo porque la acción dolosa se materializó en un solo acto y en el mismo día, es decir, el acto doloso se produjo el 9 de junio del año 2007, en este caso el plazo ordinario comenzó en esta misma fecha, pero ¿cuándo comenzó el plazo extraordinario de prescripción en este proceso penal?, el día de la intervención del Ministerio Público como consecuencia de la denuncia verbal; el Ministerio Público intervino concretamente con la Resolución de fecha 11 de junio del 2007 que a mérito de la denuncia de la agraviada, el representante del Ministerio

⁷ Sentencia de Casación N° 643-2015-Huaura del 29 de mayo de 2017. Fundamento 6.6

Público resolvió mediante un proveído, ordenando aperturar investigación policial por el término de 15 días.

La ley dice que se interrumpe por las actuaciones del Ministerio Público o el Poder Judicial; el término jurídico “*actuaciones*”, doctrinariamente, son el conjunto de actividades desarrolladas en el curso de un juicio, por la autoridad jurisdiccional, el Ministerio Público o por las partes, o sea que se componen por todo el cúmulo de hechos o actos efectuados dentro de un juicio por las personas que en él intervienen como partes, terceros, testigos, peritos o por la propia autoridad judicial o el Ministerio Público. En la norma también se encuentra determinado la palabra “*diligencias*”, específicamente, en el segundo párrafo –*del artículo 83° del CP*– cuando dice que después de la interrupción comienza a correr un nuevo plazo de prescripción, a partir del día siguiente de la última diligencia; en efecto, diligencia, según la doctrina, es el acta redactada por el funcionario competente judicial o del Ministerio Público que tiene por objeto dejar constancia de un acto con trascendencia procesal en la sustanciación de un proceso.

Con la noción doctrinaria que se tiene sobre las actuaciones del Ministerio Público o del Poder Judicial, en el Expediente N° 104-2007 primeramente intervino el Ministerio Público con el proveído citado, en consecuencia habiéndose interrumpido en esta fecha la prescripción de esta acción penal, el plazo comenzaría a contabilizarse desde el 11 de junio del 2007 hasta la última diligencia del Ministerio Público, siendo ésta la Acusación Fiscal de fecha 29 de enero del 2015 donde solicita al Juzgado adecuar el tipo penal de la denuncia formalizada, el auto apertorio de instrucción, el dictamen de acusación y el dictamen varios; comenzando entonces a transcurrir un nuevo plazo de prescripción –*extraordinario*– a partir del día siguiente de la última diligencia, esto es, desde el 30 de enero del 2015.

El Poder Judicial también ha interrumpido el plazo de prescripción ordinaria con la emisión del auto apertorio de instrucción de fecha 25 de octubre del 2007, y la última diligencia de esta entidad fue con la emisión del proveído

que ordenaba se cumpla con lo ejecutoriado, por haber la Sala Penal confirmado la Resolución que declaró improcedente la nulidad formulada por la imputada de fecha 05 de marzo del 2015, por lo tanto la prescripción estuvo interrumpida desde el 11 de junio del 2007 –*fecha de la primera actuación del Ministerio Público*– hasta el 05 de marzo del 2015.

Entonces, el plazo extraordinario de prescripción de la acción penal en el proceso 104-2007, de acuerdo al cuarto párrafo del artículo 83° del Código Penal, comenzó el día siguiente de la última diligencia del Poder Judicial – *05 de marzo del 2015*–, considerando que el plazo de interrupción desde el 11 de junio del 2007 hasta el 05 de marzo del 2015 se encontraba paralizado y este tiempo de la paralización de la prescripción, por la interrupción de las actuaciones del Ministerio Público y/o Poder Judicial no se contabilizan, por lo tanto el nuevo plazo que se contabiliza, es a partir del día siguiente de la última actuación del Poder Judicial; contabilizando el plazo de la interrupción en el delito que se tramitó en este proceso, se tiene que sería desde el 06 de marzo del 2015, de esa manera el plazo de prescripción se vence el 05 de marzo del 2018 y no otra fecha. Según la interpretación tradicional, se contabiliza el plazo ordinario más el cincuenta por ciento de este plazo, si es así, entonces vencería el 05 de marzo del año 2024.

Sentencia de Primera Instancia: Fundamentos

Sin embargo, se tiene que el Juez del Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Huamalies emitió la Sentencia N° 05-2016 contenida en la Resolución N° 169 de fecha 29 de agosto del año 2016, donde falla: *“Declarando de oficio, extinguida la acción penal por prescripción en el proceso seguido contra Violeta Esmeralda Céspedes Valdivia, Zotico Callas Melgarejo, Cesar López Claudio, Manuel Gonzales Claudio, Efraín Salvador Claudio Garay, Rubén Gonzales Claudio y Esteban Gonzales Claudio por la comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de usurpación agravada por despojo, previsto y sancionado por la conducta en el artículo 204° numeral 2 del Código Penal concordante con el tipo base del artículo*

202° numeral 2 del acotado código, y por el delito contra el patrimonio en su modalidad de daño agravado por destrucción de plantaciones previsto y sancionado la conducta en el artículo 206° numeral 4 del Código Penal concordante con el tipo base del artículo 205° del mismo cuerpo de ley, en agravio de Aurea Leonor Céspedes Valdivia de Zambrano, en consecuencia consentida y/o ejecutoriada que sea la presente resolución, mando se archive definitivamente los actuados donde corresponda, debiendo cumplir con anular los antecedentes que se hubieran generado con motivo del presente proceso”.

El Señor Juez, expuso sus fundamentos sobre la prescripción de la acción penal, afirmando: *“El fundamento constitucional de la prescripción se encuentra regulado en el artículo 139 inciso 13 de la Constitución Política del Estado, el cual prevé que la amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada. Siguiendo esta protección e interpretación constitucional, se determina, que la prescripción por regla general es una causa de extinción de la responsabilidad penal fundada en la acción del tiempo sobre los acontecimientos humanos o la renuncia del Estado al iusPuniendi o a su potestad sancionadora, en razón de que el tiempo transcurrido borra los efectos de la infracción, existiendo apenas memoria social de esta, es decir mediante la prescripción se limita la potestad punitiva del Estado, dado que se extingue la posibilidad de extinguir un hecho ilícito y con él la responsabilidad penal del supuesto autor o autores del delito investigado. Asimismo la prescripción de la acción penal conforme al principio penal pro homine, se debe considerar que la ley penal material otorga a la acción penal una función preventiva y resocializadora, a la vez que el estado auto limita su potestad punitiva contemplando la necesidad de que pasado cierto tiempo, se elimina toda incertidumbre jurídica, la prescripción tiene su fundamento en la seguridad jurídica. El principio pro homine implica que el convencimiento del órgano decidor respecto de la culpabilidad de la persona investigada debe superar cualquier duda razonable, de manera que cualquiera que exista obliga a fallar a su favor, de lo cual se tiene que*

en caso de duda sobre la comisión del hecho se debe favorecer a la persona a quien se viene atribuyendo el mismo.”

Abundando su fundamentación, el A quo señala sentencias constitucionales, relacionando que esas sentencias tienen el mismo sentir señalado por el Tribunal Constitucional en el Exp. N° 1805-2005-HC/TC, 2506-2005-PHC/TC, 4900-2006-PHC/TC y 331-2007-PHC/TC, también se aprecia que ha desarrollado en forma extensa el instituto jurídico de la prescripción de la acción penal así como de las penas señaladas, indicando que *“la prescripción desde un punto de vista general es la institución jurídica mediante el cual por el transcurso del tiempo, la persona adquiere derechos o se libera de obligaciones y desde la óptica penal es una causa de extinción de la responsabilidad criminal fundada en la acción del tiempo sobre los acontecimientos humanos o de la renuncia del Estado al ius punendi”*; así como también, *“la prescripción de la acción penal tiene relevancia constitucional toda vez que se encuentra vinculada con el contenido del derecho al plazo razonable del proceso, el cual forma parte del derecho fundamental al debido proceso”*. Continúa señalando *“(…) por su parte en el Exp. N° 3693-2008-PHC/TC, el máximo intérprete de la constitución en su fundamento 3 ha mencionado “Así la prescripción de la acción penal constituye una garantía del individuo ante la persecución penal estatal que no puede prolongarse ad infinitum”*; termina manifestando *“nuestro Código Penal, reconoce la prescripción como uno de los supuestos de extinción de la acción penal, tal como lo establece expresamente el Art. 78 numeral 1, así la prescripción de la acción penal está referido a la prohibición de iniciar o continuar con la tramitación de un proceso penal, la prescripción del delito extingue de la responsabilidad penal. El Art. 80 del Código Penal establece que la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito si fuera privativa de libertad, me refiero al plazo ordinario; y, el Art. 83 del mismo cuerpo de ley se refiere al plazo extraordinario cuando señala, sin embargo la acción penal prescribe, en todo caso, cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción”*.

El Señor Juez dice que en nuestro ordenamiento legal, el artículo 78 del Código Penal regula las causales por la que se declara la extinción de la acción penal dentro de las cuales se encuentra la prescripción, estableciendo de manera tacita: *“la acción penal se extingue por la muerte del imputado, prescripción, amnistía y el derecho de gracia, 2. Por autoridad de cosa juzgada, 3. En los casos que solo proceda la acción privada, ésta se distingue además de lo establecido en el numeral 1 por el desistimiento o transacción”*, asimismo el artículo 80 del Código Penal en su primer párrafo instituye *“la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley, por el delito si es privativa de libertad”*; igualmente el artículo 83 del código sustantivo dispone que *“sin embargo la acción penal prescribe cuando el tiempo transcurrido sobrepasa al plazo ordinario de prescripción”*.

Asimismo, el Juez Penal señaló que advirtiéndose de la revisión de autos que el ilícito penal materia del proceso se había suscitado el día sábado 9 de junio del año 2007 conforme se advierte de la propia denuncia verbal de parte, la que se corrobora con la declaración policial y preventiva de la propia agraviada, donde indica que *“el día sábado 9 del mes en curso (junio 2007) siendo aproximadamente las 8 am la denunciada y el grupo de personas no identificadas trepanado las paredes que rodean el inmueble objeto del delito ingresaron al que está ubicado en la última cuadra del jr. Prolongación Huánuco”*, dato que ha sido tomado por el representante del Ministerio Público acorde a su denuncia fiscal, por lo cual tratándose de ilícitos de ejecución instantánea conforme a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 82 del Código Penal, y defectos permanentes acorde a lo desarrollado en la jurisprudencia recaída en el R.N. N° 502-2002-HUANUCO, donde textualmente se ha indicado que, *“el delito de usurpación en la modalidad de despojo es un delito de estado o instantáneo de efectos permanentes, en cuya virtud el plazo de prescripción se inicia cuando el agente lleva acabo el despojo de la posesión sin que a estos efectos tenga relevancia la permanencia en el predio usurpado y el consiguiente sede del despojo de la posesión o tenencia del inmueble, se establece que los plazos de prescripción de la*

acción penal comienzan, a partir del día en que se consumó el despojo y turbación y los daños”; en ese sentido, el A quo hace un análisis y señala que el caso de autos data del día 9 de junio del 2007, por lo tanto, computando el plazo desde la fecha de la comisión del acto delictivo por el periodo de prescripción extemporánea de 9 años –para los delitos de usurpación y daño agravado–, se tiene que este prescribió en todo caso el 9 de junio del año 2016, de lo que se colige de sobremanera que la presente causa se encuentra prescrita a favor de los procesados Violeta Esmeralda Céspedes Valdivia, Zotico Callas Melgarejo, Cesar López Claudio, Manuel Gonzales Claudio, Efraín Salvador Claudio Garay, Rubén Gonzales Claudio y Esteban Gonzales Claudio; es decir el tiempo transcurrido desde el día en que consumo los hechos sobrepasa al plazo extraordinario de prescripción reducido a la mitad, establecido en el código sustantivo, en consecuencia opera la prescripción cesando la potestad coercitiva del Estado de perseguir y continuar la causa por los delitos materia de instrucción.

Análisis

Para iniciar con el análisis de los fundamentos del A quo en dicha sentencia, en principio se debe tener en cuenta que el delito materia de instrucción que se siguió contra los procesados Violeta Esmeralda Céspedes Valdivia, Zotico Callas Melgarejo, Cesar López Claudio, Manuel Gonzales Claudio, Efraín Salvador Claudio Garay, Rubén Gonzales Claudio y Esteban Gonzales Claudio es por la comisión del delito contra el patrimonio en su modalidad de usurpación agravada por despojo, tipificado y sancionado en el artículo 202 numeral 2 del Código Penal concordante con el artículo 204 numeral 2 del mismo cuerpo legal, cuya pena máxima que establece es **no menor de 2 ni mayor de 6 años**, de manera que computado el plazo extraordinario de prescripción (máximo más la mitad) **SERIA DE 9 AÑOS** y en cuanto al delito contra el patrimonio en su modalidad de daño agravado por destrucción de plantaciones, tipificado y sancionado en el artículo 206 numeral 4 del Código Penal concordante con el artículo 205 del mismo cuerpo de ley, establece como pena máxima **no**

menor de 1 ni mayor de 6 años, de modo que computado el plazo extraordinario de prescripción conforme a lo señalado en el punto precedente (máximo más la mitad) **TAMBIÉN SERÍA DE 9 AÑOS.**

Asimismo, se debe precisar que sobre la institución de la prescripción argumentada en la sentencia, no existe ninguna observación, pero sí en la interpretación sobre el plazo ordinario y extraordinario de la prescripción de la acción penal, por los siguientes argumentos:

- a. Que en el Expediente N° 104-2007 es cierto que el delito de usurpación agravada y daño agravado fue ejecutado por lo procesados un 9 de junio del 2007, el Juez para contabilizar la prescripción de la acción penal en dicho proceso ha indicado que la prescripción se contabiliza desde el día que se ejecutó el delito, por esa razón para declarar prescrita la acción penal en el expediente mencionado, ha contabilizado el plazo desde el día 9 de junio del 2007 y ha totalizado los 9 años que menciona en su sentencia hasta el 9 de junio del año 2016. Esta afirmación es totalmente falsa, el artículo 83 del Código Penal claramente establece que el plazo de la prescripción se interrumpe por las actuaciones del Ministerio Público o de las autoridades judiciales, **QUEDANDO SIN EFECTO EL TIEMPO TRANSCURRIDO**, este hecho legal al momento de calcular el plazo extraordinario de prescripción, el Juez Penal no ha analizado dentro del principio de legalidad. Si bien, el hecho doloso se ejecutó el 9 de junio del 2007, pero el Ministerio Público intervino recién el 11 de junio del mismo año y el Poder judicial el 25 de octubre del mismo año; en consecuencia, de acuerdo a la norma señalada, el plazo ordinario de la prescripción comenzó el 9 de junio del 2007 y habiendo intervenido el Ministerio Público y el Poder Judicial con sus actuaciones, quedó sin efecto el tiempo transcurrido de inicio de la acción dolosa hasta la intervención del Ministerio Público, siendo así, la determinación del plazo inicial citado por el Juez Penal –*a mi parecer*– es errónea, porque ha confundido el inicio del plazo ordinario, sin indicar cuando comenzó el plazo extraordinario de la prescripción de la acción penal.

- b. Otro punto a cuestionar es que en dicho proceso no se ha dado el plazo de la prescripción ordinaria señalado en la ley, como cualquier proceso penal en trámite, porque este plazo ha sido interrumpido con las actuaciones del Ministerio Público y del Poder Judicial, por lo tanto el plazo ordinario de prescripción en este expediente no existe.

La interrupción de la prescripción penal –*como en todos los procesos penales en trámite*– se produce como consecuencia de las actuaciones del Ministerio Público y de la autoridad jurisdiccional que se encuentran en el citado expediente penal fenecido, que es materia de este estudio; esta interrupción se materializó en el día que intervino el Ministerio Público y el Poder Judicial, en esta norma se encuentra determinado cuando concluye la interrupción de la prescripción (artículo 83 párrafo tercero del Código Penal). Esta aclaración se encuentra en el segundo párrafo de dicho artículo, en donde está normado en estos términos “*después de la interrupción empieza a correr un nuevo plazo para la prescripción a partir del día siguiente de la última diligencia*”.

En el proceso materia de análisis, la última diligencia se dio con la intervención del Ministerio Público con fecha 29 de enero del 2015, desde el día siguiente (30-01-2015) comenzó a correr el nuevo plazo, este hecho no se ha tenido en cuenta al momento de calcular el plazo de la prescripción ordinaria. Además en el trámite del proceso también aparece la intervención del Poder Judicial, igualmente el plazo de la prescripción se encuentra interrumpido desde su intervención hasta la última diligencia.

Entonces, al estar interrumpido sucesivamente el plazo por la intervención del Ministerio Público y el Poder Judicial, para calcular el plazo de prescripción, la ley no ha determinado, con cuál de las intervenciones de estas dos autoridades se debe contabilizar dicho plazo –*teniendo en cuenta el inicio y la última diligencia*–. En opinión de la informante, para contabilizar el inicio y término de la interrupción de

la prescripción, se debería determinar cuáles son esos actos del Ministerio Público o Poder Judicial que tengan relevancia para interrumpir el plazo de la prescripción, asimismo que sucede cuando intervienen las dos autoridades –*Ministerio Público o Poder Judicial*–, se contabiliza solo con uno de ellos o con los dos.

- c. De igual modo, el A quo considera como fundamento de derecho el artículo 78 del Código Penal, sobre la extinción de la acción penal, determinando que la acción penal se extingue por la prescripción, al fundamentar sobre la extinción de la prescripción en el ítem 5.5 de su sentencia, textualmente dice “... **se establece que los plazos de prescripción de la acción penal, comienzan a partir del día en que se consumó el despojo y/o turbación, y los daños, que para el caso de autos data el 9 de junio del año 2007, por lo que computando el plazo desde la fecha de la comisión del acto delictivo, por el periodo de prescripción extraordinaria para los delitos de usurpación y daño agravado, se tiene que este prescribió en todo caso el 9 de junio del año 2016, de lo que se colige de sobremanera que al día de la fecha la presente causa se encuentra prescrita a favor de los procesados (...); es decir, el tiempo transcurrido desde el día que se consumó los hechos sobrepasa el plazo extraordinario de prescripción, reducido a la mitad, establecido en el código sustantivo, por lo tanto opera la prescripción cesando la potestad coercitiva del estado de perseguir y continuar la causa por delito materia de instrucción**”. El Juez Penal ha llegado a determinar esta prescripción extraordinaria de oficio tanto para el delito de usurpación agravada y daño agravado, en un plazo de 9 años; en opinión de la informante, esta interpretación tradicional incurre en errores, por lo siguiente:

El artículo 83 del Código Penal en ninguno de sus párrafos, literalmente menciona, **que comienza la prescripción ordinaria desde el día que se materializo el delito doloso**. La usurpación y daño agravado tramitado en el Expediente N° 104-2007, como manifiesta el Juez se

realizó el 9 de junio del año 2007 y según esta norma, desde ese día, **no se determina el inicio de la prescripción extraordinaria.** En el primer párrafo de este artículo textualmente la norma dice: LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SE INTERRUMPE POR ACTUACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES *–en la sentencia en ninguno de sus considerandos se ha determinado el inicio y la culminación de la interrupción del Ministerio Público y de la autoridad jurisdiccional–.* Como ya se explicó, la prescripción de la acción penal se encontró interrumpida por actuación del Ministerio Público y de la autoridad jurisdiccional, sin embargo, solo se ha afirmado que los tipos penales atribuidos a los procesados, establecen como pena máxima privativa de libertad 6 años, por lo que el 9 de junio del 2016 se encuentra prescrita la acción. La norma en este mismo párrafo claramente precisa **QUEDANDO SIN EFECTO EL TIEMPO TRANSCURRIDO**, por lo que esta normado taxativamente en la ley, que el tiempo transcurrido por la interrupción se encuentra sin efecto. En el segundo párrafo de dicho artículo aclara mejor sobre la interrupción de la prescripción, al determinar **DESPUÉS DE LA INTERRUPCIÓN COMIENZA A CORRER UN NUEVO PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN A PARTIR DE LA ÚLTIMA DILIGENCIA**, por lo tanto, se debió haber motivado cual fue la última diligencia de la interrupción y desde cuando corrió el nuevo plazo para determinar de oficio que la acción penal se encontraba prescrito, como se aprecia de la sentencia solo ha señalado fechas (9 de junio de 2007 y 9 de junio de 2016) como argumento de la prescripción, violando los derechos fundamentales del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, entre las que destaca el derecho de la defensa, a la motivación de las resoluciones judiciales, a la obtención de una resolución fundada en derecho, al plazo razonable del proceso, entre otros derechos fundamentales.

Del mismo modo, este artículo no solo ha normado que la prescripción de la acción penal se interrumpe con las actuaciones del Ministerio Público y la autoridad judicial, sino también que está considerado que

se interrumpe la prescripción de la acción por la **COMISION DE UN NUEVO DELITO DOLOSO**; en el citado expediente los imputados no cometieron nuevo delito, en efecto no hubo ninguna interrupción de prescripción de la acción penal en este extremo.

El artículo 83 utilizado por el Juez Penal, como uno de sus fundamentos jurídicos, no ha sido interpretado conforme a su espíritu porque esta contabilizando el tiempo de la prescripción solo desde el día que se ejecutó el hecho doloso de la usurpación agravada y daño agravado; sin embargo, analizado la norma solo procede la prescripción ordinaria contabilizando el plazo desde la fecha que se ejecutó el acto doloso cuando no hubiese existido ninguna interrupción. El proceso materia de análisis, se encuentra interrumpido por las diligencias del Ministerio Público y del Poder Judicial, puesto que con sus intervenciones interrumpieron la prescripción, por cuanto desde esa fecha comenzó a transcurrir un nuevo plazo y culminaba a partir del día siguiente de la última diligencia; es decir, al encontrarse interrumpido la prescripción de la acción penal, estuvo corriendo un nuevo plazo y no se encontraba vencido, por no haber transcurrido aún los 9 años desde que comenzó y/o terminó las actuaciones de estas dos autoridades, de modo que no se podía haber declarado de oficio la prescripción por encontrarse interrumpido dicho plazo.

Por otro lado, el artículo 82 del Código Penal establece la prescripción ordinaria, según esta norma *“solo se produce cuando no existe ninguna interrupción en el trámite de la acción penal”*, en buena cuenta existe la prescripción ordinaria cuando no se hubiera perseguido la acción penal para ser sancionado el imputado sobre la carga penal que tiene. Mientras que el artículo 83 del Código Penal es una norma independiente y exclusivamente para tratar la interrupción de la acción penal.

En el expediente judicial N° 104-2007 no se podía haber contabilizado la prescripción como ordinaria sino como una prescripción

extraordinaria, por eso debió haberse contabilizado la prescripción extraordinaria con la fecha del día siguiente de la última diligencia del Ministerio Público o la autoridad jurisdiccional y no haber contabilizado erróneamente la prescripción extraordinaria con el día que se produjeron los hechos, de tal manera que la sentencia de primera instancia erróneamente ha determinado el inicio de la fecha de la prescripción extraordinaria en una fecha distinta a la que aparece en los actuados, interpretación errónea que viene siendo avalado por años por la autoridad jurisdiccional tradicional y por el Ministerio Público.

Sentencia de Segunda Instancia: Fundamentos

Al haberse emitido la sentencia por el Juez Penal, la parte agraviada (quien estuvo constituida en el proceso como parte civil) al considerar que ésta no se encontraba arreglada a ley, interpuso recurso de apelación dentro del plazo legal.

Encontrándose lo autos en la Sala, se ordenó pasar los actuados al Despacho del Fiscal Superior de Huánuco. El representante del Ministerio Público dictaminó opinando confirmar la sentencia emitida por el señor Juez de Huamalies; y, entre otros, el fundamento de su dictamen fue sostenido en estos términos “(...) *el caso de la prescripción extraordinaria la última parte del art. 83 del Código Penal señala que opera cuando (...) el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción (...)*”.

Esta afirmación tradicional del Fiscal, autor del dictamen que opina confirmar la sentencia de primera instancia, al igual que sus homólogos y la autoridad jurisdiccional, parten de la idea central de que la prescripción extraordinaria comienza el día que se ejecutó el hecho doloso, por lo tanto, en mi opinión dicho dictamen es ilegal, sin embargo fue la base jurídica que sirvió para los argumentos de la sentencia de vista emitida por la Sala Penal Liquidador de Huánuco.

El Juez Penal, los Vocales que conforman la Sala Penal y los Fiscales –en el presente proceso–, tienen la convicción que la prescripción extraordinaria solo se computa a partir del día que se consumó el delito instantáneo tramitado en el Expediente N° 104-2007 sobre usurpación y daño agravado.

En la sentencia de vista emitida por la Sala Penal Liquidadora de Huánuco mediante Resolución N° 173 de fecha 25 de octubre del 2016, en el ítem 6 de su razonamiento de la citada sentencia, el Colegiado entre otros ha afirmado: *“Siendo así la acción penal prescribió ordinariamente el 9 de junio del año 2013; no obstante ello, en el presente caso es de aplicación el último párrafo del artículo 83 del Código Penal vigente, establece textualmente que: “/.../ sin embargo la acción prescribe en todo caso cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción /.../”, por lo que la acción penal prescribió extraordinariamente el 9 de junio del 2016 aproximadamente; entonces podemos afirmar que en el caso in examine, ha transcurrido el término necesario para que opere la acción liberadora de tiempo y se extinga la acción penal, por lo que la resolución venida en grado se encuentra arreglada a derecho”.*

Análisis

Esta afirmación del Colegiado en opinión de la informante es totalmente errónea por lo siguiente:

- a. El Colegiado confunde el plazo ordinario de la prescripción de la acción penal con el plazo extraordinario de la misma, no obstante que se encuentran legislados independientemente en el Código Penal, se ha afirmado como si se tratara de situaciones jurídicas implicados solo en una norma, por eso, señala que la acción penal prescribió extraordinariamente el 9 de junio del 2016, esta afirmación es errónea a la luz de la norma antes indicada porque en el proceso penal 104-2007, tan luego como se ejecutó la materialidad de los delitos de usurpación y daño agravado intervinieron el Ministerio Público y el

Poder Judicial, en efecto solo existe la prescripción ordinaria cuando no hubiese intervenido el Ministerio Público o el Poder Judicial por espacio de 6 años, porque la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijado en la ley, el máximo del delito fijado por la ley en los delitos de usurpación y daño agravado es de 6 años, en consecuencia solo se puede afirmar de una prescripción ordinaria cuando no se hubiese tramitado durante 6 años consecutivos para condenar al ciudadano que tiene carga penal y que recién pasado este tiempo se hubiese comenzado a tramitar el delito consumado hace 6 años.

El Colegiado erróneamente ha contabilizado el tiempo ordinario más el 50% determinado en el tipo penal de los delitos de usurpación y daño agravado. La norma no señala que para calcular el plazo extraordinario de la prescripción, se tiene que contabilizar desde el día que se ejecutó el acto doloso, el artículo 83 del Código Penal –*último párrafo*–, precisa que al plazo ordinario se debe agregar el 50% de este plazo ordinario cuando el imputado hubiese cometido nuevo delito aun teniendo en trámite otro proceso penal; y, en la situación del Expediente N° 104-2007 solo fue interrumpido por el Ministerio Público y el Poder Judicial, no hubo más interrupción, en esta situación se debió haber calculado el plazo de la prescripción extraordinaria del máximo legal fijado para condenar la pena privativa de la libertad más el 50%, este cálculo debió haberse hecho partiendo desde el momento que inició sus diligencias o actuaciones el Ministerio Público o el Poder Judicial.

Sin haberse calculado en la forma como se ha explicado y sin motivar los hechos de cuando comenzó y termino las interrupciones efectuadas por el Ministerio Público y el Poder Judicial, calcularon el plazo de la prescripción ordinaria simplemente tomando el plazo máximo de la ley que tipifican los delitos de usurpación y daño agravado, para concluir que prescribió la acción penal el 9 de junio de 2016. Por lo tanto, considero que no ha transcurrido el termino necesario para que opere la acción liberadora del tiempo y se extinga la acción penal a favor de los imputados porque a la fecha que se emitió la sentencia de primera

instancia solo habían transcurrido 6 años, 3 meses y 24 días; en consecuencia la afirmación de los órganos jurisdiccionales es totalmente falso y contrario a las normas antes citadas (artículos 80, 82 y 83 del Código Penal).

- b.** Finalmente, en este proceso penal, es de verse de sus actuados, la realidad de la administración de justicia en los medios rurales (provincias alejadas de la capital de los departamentos), por lo que la distancia entre la provincia y capital de departamento se ve reflejada en el atraso en el sistema de notificación, pues se demoran meses; por ejemplo, se interpusieron más de quince nulidades, cuyo trámite tiene un promedio de tres a cuatro meses, también se aprecia más de tres recusaciones *–para remitir el expediente del Juzgado del Juez recusado al llamado por ley o al que se va a evocar la causa, según los actuados cada uno tiene un promedio de cinco meses–*, de igual forma se han emitido más de tres sentencias y todas fueron anuladas y en cada anulación se dejaba insubsistente el dictamen fiscal de acusación, asimismo se advierte que para dilatar el proceso, el Colegiado que integraban los años pasados *–no los autores de la sentencia de vista–*, después de haber devuelto el expediente a su Juzgado de origen con la resolución que declaraba infundada la nulidad, ordenaban que se vuelva a devolver el expediente para corregir el trámite; siendo así, estos errores atribuidos al órgano jurisdiccional, en cierta medida dilataron el proceso, lo cual pues, benefició a los imputados, quienes finalmente consiguieron que la acción penal ejercida en su contra, prescriba.

CAPITULO IV

APORTES PARA LA SOLUCION DEL PROBLEMA

Como es de verse el artículo 83° del Código Penal hasta la fecha ha generado confusión en el cómputo del plazo de la prescripción extraordinaria; por cuanto, según a la letra de dicho artículo las circunstancias fácticas que se menciona son: *“las actuaciones del Ministerio Público o de las autoridades judiciales”*. La expresión aquí utilizada por nuestro legislador es muy imprecisa o abierta dejándose al juzgador la discrecionalidad de determinar cuales son “los actos o el acto”, en sí, que interrumpen la prescripción.

En virtud de ello, es necesario subsanar estas vaguedades en base de una interpretación sistemática y teleológica puesto que el método literal nos es insuficiente; y no hay mejor cuerpo jurídico penal, que analizarlo de la mano con el Código Procesal Penal.

Para un mejor entender, comenzaremos determinando cuál o cuáles serían las actuaciones del Ministerio Público según el Nuevo Código Procesal Penal, así como el Código de Procedimientos Penales.

No se puede entender que el artículo 83 del Código Penal regula *“cualquier”* actividad realizada por el Fiscal, desde que éste toma conocimiento del hecho delictuoso, para poder considerarlas como causales de interrupción ya que ello atentaría contra las mismas bases o finalidades por la cual se erige la prescripción de la acción penal como es la optimización del libre desarrollo de la personalidad. Es totalmente intolerable concluir, de modo literal, que sean varias y diferentes las actuaciones del Ministerio Público las que puedan interrumpir el plazo prescriptorio; a mi consideración solo es posible deducir tal efecto cuando se da *“un Acto Único”* por parte del Fiscal dentro de su actividad investigatoria. No se puede interpretar de otra manera porque el artículo VII.3 del Título Preliminar del Código Procesal Penal⁸ no nos lo permiten ni, sobre todo, nuestras bases constitucionales. Entonces lo que nos queda por hacer es

⁸ Art. VII. 3 del CPP: *“La ley que coacte la libertad o el ejercicio de los derechos procesales de las personas, así como la que limite un poder conferido a las partes establezca sanciones procesales, será interpretada restrictivamente. La interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas mientras no favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos.”*

determinar qué “acto”, que el Código Procesal Penal fija para el Fiscal como representante del Ministerio Público, tiene la suficiente virtualidad como para interrumpir el decurso del plazo ordinario de prescripción.

El Ministerio Público se encuentra facultado, según el artículo 122 del Código Procesal Penal, para dictar tres tipos de “actos”, éstas son las Disposiciones, Providencias y Requerimientos. Solo una de estas actuaciones tiene la suficiente entidad o relevancia jurídica para que pueda, racionalmente, interrumpir el plazo prescriptorio, la cual tiene que estar reducida solo a aquellas actuaciones conectadas con la promoción de la acción penal. Se reflexiona de esta manera gracias, nuevamente, a lo exigido en el artículo VII.3 del Título Preliminar del Código Procesal Penal.

Lo dicho hasta ahora debemos de concordarlo con el artículo 2.4 del Código Procesal Penal, ya que es la única norma que incide sobre el tema de la promoción de la acción penal de modo expreso. Esta norma nos da a entender, entre sus líneas, que el Fiscal mediante un acto de “Disposición” es quien promueve la acción penal. Tal alcance normativo termina por reafirmarse en los artículos 61.2 y 122.2 del Código Procesal Penal; en este último se indica: *“Las Disposiciones se dictan para decidir: a) el inicio, la continuación o el archivo de las actuaciones; (...)”*

“Por tanto, el inicio o promoción de la acción penal por el Ministerio Público se materializa por regla general en el proceso penal común con la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria (artículo 3 del CPP). En la investigación preliminar todavía no se decide el ejercicio de la acción penal y más bien la serie de recaudos que se recaban se dirigen justamente a determinar si hay indicios suficientes o no de la comisión de un hecho delictivo para ejercitar o no la acción penal. La formalización es un acto de postulación al proceso penal que permite el ingreso a la investigación preparatoria y que consiste en atribuir a una persona determinada participación en unos concretos hechos que presentan los caracteres de un delito (imputación); a diferencia de la acusación que es un acto postulatorio para el

juicio que además de la imputación contiene una pretensión penal de condena y de reparación civil.”⁹

Continuando con el razonamiento, los actos principales e iniciales de la investigación son las diligencias preliminares y la formalización y continuación de la Investigación Preparatoria. Para nuestro propósito entendemos que solo una de ellas tiene la capacidad para promocionar la acción penal de modo decisivo contra el encausado previamente identificado; la actuación a la que estamos aludiendo no es nada menos ni nada más que la “*Formalización de la Investigación Preparatoria*” que se da mediante un acto de disposición.

Esto se debe a que las diligencias preliminares, según el artículo 330 del Código Procesal Penal, tienen como propósito describir los hechos, asegurar los elementos materiales de su comisión y principalmente individualizar e identificar a las personas involucradas en el posible ilícito; quiere decirse que hasta antes de que se dé la Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria la identidad del sujeto es desconocido o dudosa, además hay que agregar que cuando se formaliza la Investigación Preparatoria es porque el Fiscal califica que el hecho denunciado constituye delito y por tanto debe ser justiciable penalmente (artículo 334.1 del CPP) o de lo contrario optaría por archivar lo actuado.

Por lo que yo no puedo accionar la interrupción del plazo prescriptorio de la acción penal bajo un contexto donde aún no se conoce o se duda sobre la identidad del imputado y donde aún, también, es incierta la situación delictiva de un hecho. No es debido darle relevancia prescriptoria a algo dudoso o vacilante por lo mismo que mengua las bases por la cual se construye la prescripción de la acción penal que son la seguridad jurídica y el libre desarrollo de la personalidad. Son muy distintas las consecuencias en el proyecto de coexistencia de una persona sobre su quehacer cuando su situación jurídica es aún incierta o imprecisa que cuando ya

⁹ TABOADA PILCO, Giampol. “Análisis del Acuerdo Plenario N° 1-2010/CJ-116 Sobre la Prescripción de la Suspensión en el Nuevo Código Procesal Penal”. En la revista AEQUITAS de la Corte Superior de Justicia de Piura. Pág. 110

hay algo concreto o específico en su persecución penal dentro de un proceso donde intervienen sujetos procesales ya constituidos.

En conclusión, cuando el artículo 83 del Código Penal nos habla de las “*actuaciones del Ministerio Público*”, contextualizado a la luz del Código Procesal Penal, está referida a la “formalización de la Investigación Preparatoria”; o sea, **la formalización de la Investigación Preparatoria es aquella actuación del Ministerio Público que exige el tenor literal del artículo 83 del Código Penal.**

Ahora bien, si lo analizamos a la luz del Código de Procedimientos Penales, después de lo ya expresado, “los actos” del Ministerio Público que interrumpirían la prescripción, serían necesariamente “la interposición de la denuncia fiscal”, así como “la acusación fiscal”.

Asimismo, queremos hacer mención de una parte del artículo 83 del Código Penal donde todos los autores que hasta ahora hemos revisado han omitido de analizarla; nos referimos, pues, cuando se nos habla de las “*actuaciones de las autoridades judiciales*” como una razón para la interrupción de la prescripción.

En mi opinión, esto se soluciona de la siguiente manera:

En el modelo con el Código Procesal Penal, como lo he mencionado líneas arriba, solo un “Acto” –*la Disposición de la formalización de la Investigación Preparatoria*– es más que necesario para interrumpir el plazo prescriptorio ordinario según lo normado en el Código Penal, por lo que se queda en el aire o sin contenido “las actuaciones de las autoridades judiciales”. La razón es evidente, ya no tiene, este ámbito de aplicabilidad, cabida en nuestro ordenamiento jurídico penal actual porque las actuaciones de los jueces ya no están destinadas a investigar ni promocionar la acción penal, sino a garantizar los derechos fundamentales del imputado, su juzgamiento y sentencia con imparcialidad e independencia; entonces al ya no confundirse los roles de los sujetos procesales, las actuaciones judiciales poco o nada tendrían que ver con

el tema de la interrupción de la prescripción de la acción penal por no situarse ya el juez dentro las actuaciones investigatorias.

Y en el modelo con el Código de Procedimientos Penales, considerando que la primera etapa del proceso penal, era la “instrucción” y estaba exclusivamente a cargo del juez instructor pues era el responsable y encargado de realizar las investigaciones para reunir las pruebas de la realización del delito, las circunstancias en que se ha perpetrado, sus móviles y descubrir a los autores y cómplices del mismo; entonces, teniendo en cuenta ello, “*el acto*” de la autoridad judicial que interrumpiría la prescripción, sería la emisión del Auto apertorio de Instrucción –*resolución judicial que expide el juez, luego de recibir la denuncia del Fiscal provincial, que da inicio a la instrucción*–, así como el Auto de Enjuiciamiento –*resolución que ordena haber mérito para pasar a juicio oral*–.

CONCLUSIONES

1. La interpretación efectuada de los artículos 82° y 83° del Código Penal, ha sido con el fin de esclarecer sus sentidos y el contenido del espíritu por ser fuente de derecho, no obstante existir una interpretación tradicional que ha conllevado a la realidad actual de hacer prescribir las acciones penales, confundiendo los plazos, sus contenidos y la iniciación para la cuantificación ordinaria y extraordinaria de la acción penal. El proceso penal signado al Expediente N° 104-2007 es fiel expresión de la tratativa que vienen realizando a nivel nacional los jueces del Poder Judicial y Fiscales del Ministerio Público. Esta situación debe superarse para la seguridad jurídica del ciudadano y la defensa de su derecho constitucional de tutela procesal efectiva, así como el respeto al derecho de libre acceso a la autoridad jurisdiccional como en el fin de obtener una resolución fundada a derecho.
2. La interrupción de la prescripción ocurre cuando el Estado expresa su decisión de perseguir el hecho penalmente relevante. Por eso tiene sentido considerar a las actuaciones del Ministerio Público y a las del Poder Judicial causales de interrupción.
3. Como se ha observado, la prescripción que aplica la jurisprudencia está basada esencialmente en el simple cómputo de plazos a partir del momento del hecho consumado, y es el resultado del fácil recurso al que recurren los imputados para hacer archivar los procesos en su contra. Entonces eso debe y tiene que cambiar para bien de la justicia, porque además la prescripción no es solo aquel sencillo cómputo de plazos referidos, sino es una institución un tanto más compleja.
4. El debate sobre los temas planteados y otros relacionados con la “prescripción de la acción penal” no está cerrado. Será trabajo del legislador realizar los cambios normativos necesarios para dar coherencia a nuestro ordenamiento jurídico, así también será labor de los órganos jurisdiccionales y de todo operador del derecho el brindar interpretaciones

válidas a la “prescripción” como institución jurídica, y así de esta forma se garantice no solo la eficacia del sistema, sino también el derecho que toda persona tiene a no estar en un permanente riesgo de persecución y de sanción penal, cuando por el paso del tiempo ello ya no es necesario.

RECOMENDACIONES

Una vez concluido el presente trabajo, se considera interesante proponer lo siguiente:

- ✓ El plazo extraordinario de prescripción debe computarse a partir de la primera interrupción. De este modo sí se respeta su razón de ser: darle al Estado la posibilidad real de que su actividad de persecución pueda concluir en un pronunciamiento formal.
- ✓ En tal sentido, debería modificarse el artículo 83° del Código Penal para incluir esta regla, es decir, especificar que la prescripción extraordinaria no opera a contabilizarse por la simple actuación del Ministerio Público o Poder Judicial *–como se viene interpretando–*, sino que a raíz de sus intervenciones empieza a correr un nuevo plazo de prescripción.
- ✓ En cuanto a la expresión señalada en el artículo 83° *“las actuaciones del Ministerio Público o de las autoridades judiciales”* esta es muy genérica o abierta, por lo que también debería ser materia de análisis con la finalidad de sentar jurisprudencia al respecto, teniendo en consideración la tramitación que se da a los procesos penales según el Código Procesal Penal, así como el Código de Procedimientos Penales *–por aun existir expedientes que se encuentran tramitados bajo este Código–*.
- ✓ Se debe realizar una capacitación sostenida a los jueces a fin de que comprendan a cabalidad la interpretación del artículo 83° del Código Penal, así se podrá prevenir que la justicia se aplique violando los principios (igualdad y seguridad jurídica), derechos y garantías procesales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. TABOADA PILCO, Giammpol. “*Análisis del Acuerdo Plenario N° 1-2010/CJ-116 Sobre la Prescripción de la Suspensión en el Nuevo Código Procesal Penal*”. En la revista AEQUITAS de la Corte Superior de Justicia de Piura. Año III. N° 05, 2012.
2. CARO JOHN, José Antonio. “*Summa Penal*”. 2da Edición. 2017
3. PARIONA ARANA, Raul. “*La prescripción el Código Procesal Penal de 2004. ¿Suspensión o Interrupción de la Prescripción?*”. En Gaceta Penal y Procesal Penal, Tomo 23, Mayo 2011.
4. PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raul. “*Derecho Penal. Parte General*”. 4ta Edición. Tomo II, Enero 2011.
5. CASTILLO ALVA, José Luis. “*Jurisprudencia Vinculante Penal, Procesal Penal y de Ejecución Penal*”. Tomo I, Octubre 2016.

Jurisprudencia:

- ✓ Acuerdo Plenario N° 9-2007/CJ-116 del 16 de noviembre de 2007. Sobre los plazos de prescripción de la acción penal para delitos sancionados con pena privativa de libertad según los artículo 80 y 83 del Código Penal.
- ✓ Acuerdo Plenario N° 1-2010/CJ-116 del 16 de noviembre de 2010. Prescripción: Problemas actuales
- ✓ Acuerdo Plenario N° 3-2012/CJ-116 del 26 de marzo de 2012. Sobre la necesidad de reevaluar la suspensión de la prescripción dispuesta en el artículo 339º.1 del Código Procesal Penal.
- ✓ Sentencia de Casación N° 383-2012-La Libertad del 15 de octubre de 2013.

- ✓ Sentencia de Casación N° 643-2015-Huaura del 29 de mayo de 2017.

Web:

- ✓ <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/viewFile/18517/18757>
- ✓ <http://www.monografias.com/trabajos93/prescripcion-penal-completa/prescripcion-penal-completa.shtml#conclusioa#ixzz57wwG8FFe>
- ✓ <https://historico.pj.gob.pe/cortesuperior/Huaura/documentos/Capitulo%201%20NCPP.pdf>